



REPÚBLICA DE COLOMBIA
RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO
JUZGADO VEINTISÉIS ADMINISTRATIVO DE ORALIDAD DE BOGOTÁ D.C.

Bogotá D.C., diecisiete (17) de junio de dos mil diecinueve (2019)

RADICACIÓN: **11001-33-35-026-2019-00247-00**
MEDIO DE CONTROL: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
ACTOR: **JULIO ENRIQUE ÁNGEL SILVA**
OPOSITOR: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL PARA LA GESTIÓN PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL - UGPP

En el presente asunto, el señor **JULIO ENRIQUE ÁNGEL SILVA**, promueve demanda en contra de la **UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL PARA LA GESTIÓN PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL - UGPP**, con el objeto de obtener la reliquidación de una pensión de jubilación con la inclusión de la prima de costo.

Conforme a lo anterior, y revisado el expediente, este despacho observa que no es posible avocar conocimiento de la demanda presentada, teniendo en cuenta las siguientes,

CONSIDERACIONES

Como primera medida, la Ley 1437 de 2011 por la cual se expidió el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, consagró en el Título V, todos los aspectos relacionados con los presupuestos procesales de admisibilidad de las demandas que se promuevan ante esta Jurisdicción.

Concretamente, el Capítulo III de la norma ibídem, consagra los requisitos que deben reunir las demandas, y para el efecto el artículo 162 dispuso:

“Artículo 162 Contenido de la Demanda. Toda demanda deberá dirigirse a quien sea competente y contendrá:

- 1. La designación de las partes y sus representantes.*
- 2. Lo que se pretenda, expresando con precisión y claridad. Las varias pretensiones se formularán por separado, con observancia de lo dispuesto en este mismo Código para la acumulación de pretensiones.*
- 3. Los hechos y omisiones que sirvan de fundamento a las pretensiones, debidamente determinados, clasificados y numerados.*

4. *Los fundamentos de derecho de las pretensiones. Cuando se trate de la impugnación de un acto administrativo deberán indicarse las normas violadas y explicarse el concepto de su violación.*
5. *La petición de las pruebas que el demandante pretende hacer valer. En todo caso, este deberá aportar todas las documentales que se encuentren en su poder.*
6. *La estimación razonada de la cuantía, cuando sea necesaria para determinar la competencia.*
7. *El lugar y dirección donde las partes y el apoderado de quien demanda recibirán las notificaciones personales. Para tal efecto, podrán indicar también su dirección electrónica.”*

Ahora bien, en cuanto a los actos administrativos que se pueden demandar ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo, se debe tener en cuenta en primer lugar, que la ley 1437 de 2011 en su artículo 43, señala que “*Son actos definitivos los que decidan directa o indirectamente el fondo del asunto o hagan imposible continuar la actuación.*”

Para explicar lo anterior, debe tenerse en cuenta como primera medida, que existen varias clases de actos administrativos que puede proferir la administración, a saber, los actos de trámite o preparatorios, los definitivos y los de ejecución, sin embargo, no todos son susceptibles de ser demandables ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo para estudiar su legalidad, pues para ello deben contar con una condición “*sine qua non*”, y es que creen, modifiquen o extingan una situación jurídica.

En otras palabras, si los actos administrativos no son definitivos, es decir, si no contienen la manifestación de la voluntad de la administración con la cual se culmine con el procedimiento administrativo ante la entidad respectiva, tal como lo define el artículo 43 del C.P.A.C.A., no pueden demandarse bajo los medios de control que consagra la Ley 1437 de 2011.

Al respecto, el Consejo de Estado – Sección Segunda, en proveído adiado 25 de mayo de 2017, dentro del expediente 2012-00400, C.P. Dr. CARMELO PERDOMO CUÉTER, hizo alusión a esta diferenciación entre las clases de actos administrativos, indicando lo siguiente:

*“Se ha entendido el acto administrativo como la manifestación de voluntad de la administración, en ejercicio de la función administrativa, orientada a producir efectos jurídicos que crean, modifican o extinguen una situación jurídica, y, por ende, susceptible del control jurisdiccional. También puede ser impugnado en sede administrativa a través de los recursos de la vía gubernativa o por revocación directa. Sobre este último aspecto, los artículos 49 y 50 del Código Contencioso Administrativo (CCA) establecen que «No habrá recursos contra los actos de carácter general, ni contra los **de trámite, preparatorios, o de ejecución** excepto en los casos previstos en norma expresa» y «Por regla general, contra los actos **que pongan fin a las actuaciones administrativas** procederán los siguientes recursos: [...] Son **actos definitivos**, que ponen fin a una actuación administrativa, los que*

deciden directa o indirectamente el fondo del asunto; los actos de trámite pondrán fin a una actuación cuando hagan imposible continuarla» (negritas no son de los textos).

*En este sentido, ha de comprenderse que el **acto de trámite** es aquel que no le pone fin a una actuación administrativa o asunto, sino que tiende a impulsarla hasta su culminación, mientras que el **definitivo** la resuelve de fondo y la termina. Al respecto, esta Corporación¹ ha sostenido:*

[...]

La referida norma [art. 50 CCA] hace una distinción entre actos administrativos definitivos y los actos de trámite. Los primeros son aquellos que concluyen la actuación administrativa, en tanto que deciden directa o indirectamente el fondo del asunto y producen efectos jurídicos definitivos, mientras que los de trámite contienen decisiones administrativas necesarias para la formación del acto definitivo, pero por sí mismos no concluyen la actuación administrativa, salvo que, como lo prevé la norma, la decisión que se adopte impida que continúe tal actuación, caso en el cual se convierte en un acto administrativo definitivo porque le pone fin al proceso administrativo.

La calificación de un acto administrativo como acto definitivo o de trámite es fundamental para determinar si es susceptible de recursos por la vía gubernativa y asimismo de control jurisdiccional contencioso administrativo, conforme a los artículos 49, 50 y 84 del Código Contencioso Administrativo.

[...]

Así pues, conforme a lo señalado por el H. Consejo de Estado, es claro que los actos de trámite o preparatorios, que simplemente buscan impulsar la actuación administrativa para que llegue hasta su culminación, no pueden ser demandados, en este caso, bajo el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, en tanto no contienen en sí mismos una decisión definitiva frente al pedimento elevado por el interesado, lo cual impide que se realice un estudio de legalidad, pues no deciden el fondo del asunto y no producen efectos jurídicos definitivos, que como se dijo, es el requisito sine qua non para que se ejerzan las acciones legales respectivas, o los recursos en vía gubernativa que consagra el C.P.A.C.A.

Ahora bien, aun cuando la providencia traída a colación hace alusión al Decreto 01 de 1984, lo cierto es que la ley 1437 de 2011, también estableció en su artículo 75, que no habrá lugar a presentar recursos contra los actos de carácter general, ni contra los de trámite, preparatorios, o de ejecución, excepto los casos previstos en norma expresa.

¹ Consejo de Estado, sala de lo contencioso-administrativo, sección quinta, sentencia de 22 de octubre de 2009, radicación número: 11001-03-28-000-2008-00026-00; 11001-03-28-000-2008- 00027-00, consejero ponente: Filemón Jiménez Ochoa, actor: Camilo Araque Blanco y otros.

En este orden de ideas, al analizarse el acto administrativo que se censura en el presente asunto, es claro para el Despacho que se trata de un acto ejecución, no susceptible de control jurisdiccional, por lo siguiente.

El artículo 278 del Código General del Proceso, establece los tipos de providencias que se profieren en el curso de los procesos judiciales, bajo el siguiente contenido normativo:

“Artículo 278. Clases de providencias. Las providencias del juez pueden ser autos o sentencias.

Son sentencias las que deciden sobre las pretensiones de la demanda, las excepciones de mérito, cualquiera que fuere la instancia en que se pronuncien, las que deciden el incidente de liquidación de perjuicios, y las que resuelven los recursos de casación y revisión. Son autos todas las demás providencias.”

Dentro del acto acusado, quedó expuesto que el Consejo Seccional de la Judicatura de Cundinamarca- Sala Jurisdiccional Disciplinaria, profirió sentencia en el trámite de la acción de tutela el 14 de julio de 2006, en la cual se despacharon favorablemente las pretensiones formuladas en el sentido de proteger los derechos fundamentales a la dignidad humana, la subsistencia, el mínimo vital, y la salud en conexidad con la vida digna, por lo cual se impartió la orden al Ministerio de Relaciones Exteriores para que procediera a enviar nuevamente la información que constitucionalmente corresponde para la pensión del demandante, con los salarios que realmente devengó en su cargo de VICECONSUL de Colombia en San Cristóbal/Venezuela desde el 1° de marzo de 1978 hasta el 30 de septiembre de 1981, para que CAJANAL lo tenga en cuenta para una correcta liquidación.

Para dar cumplimiento a la anterior providencia judicial debidamente ejecutoriada, CAJANAL profirió la Resolución No. 44808 del 5 de septiembre de 2006, por la cual la Asesora de la Gerencia General del Grupo de Servidores Públicos (E), re liquidó la pensión de jubilación del demandante.

Continuando con el análisis del caso, es preciso indicar que el acto administrativo contenido en la Resolución No. 44808 del 5 de septiembre de 2006, liquidó la pensión de jubilación del actor en proporción equivalente al 75% sobre el salario promedio, dando así cumplimiento a la sentencia proferida por el Consejo Seccional de la Judicatura de Cundinamarca- Sala Jurisdiccional Disciplinaria el 14 de julio de 2006, por lo que es claro, que el acto acusado constituye un acto administrativo de ejecución, que no es pasible del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho en los términos expuestos en la demanda, pues el mismo fue la concreción de la orden impartida en la instancia jurisdiccional, ordenando la reliquidación de la pensión de jubilación en los parámetros descritos en la Orden Judicial.

Ahora bien, y en gracia de discusión, si el señor Ángel Silva tenía alguna inconformidad con la resolución expedida en virtud del cumplimiento al fallo en sede de tutela, podía interponer un trámite incidental para hacer cumplir a cabalidad la orden dada por el Consejo Seccional de la Judicatura de Cundinamarca- Sala Jurisdiccional Disciplinaria.

En concordancia con lo anterior, el H. Consejo de Estado en un caso similar al que nos ocupa, señaló lo siguiente²:

“3.3. Conclusión.

*En las anteriores condiciones se modificará la decisión apelada en cuanto declaró terminado el proceso al encontrar probada la excepción denominada “ineptitud sustantiva de la demanda” cuando ello no es procedente, en su lugar, **se declarará terminado el proceso toda vez que el acto de ejecución expedido por la Gobernación del Departamento del Magdalena en cumplimiento de un fallo de tutela como mecanismo transitorio, no es demandable ante esta jurisdicción en cuanto con el mismo solo se dio estricto cumplimiento a la decisión judicial al reconocer la pensión vitalicia de jubilación del actor y lo propio resulta en relación con el que negó la reliquidación de la pensión reconocida en aquel.***

Por tanto, lo procedente en este caso es dejar sin efecto la admisión de la demanda y rechazar la misma con base en la causal prevista en el artículo 169 ordinal 3° del CPACA, como medida de saneamiento procesal para evitar un fallo inhibitorio.

En últimas, debe tenerse en cuenta que los actos demandados tampoco podrían ser enjuiciados en este asunto en cuanto la situación pensional del actor actualmente es objeto de control de legalidad por la jurisdicción contenciosa administrativa en segunda instancia en proceso ordinario judicial diferente.”

Negrilla y subraya fuera de texto

Corolario de lo anterior, es del caso rechazar la demanda, pues el acto acusado no contiene una decisión definitiva que permita a este estrado judicial realizar el control de legalidad que se pretende, y en este evento el artículo 169 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, dispone en su numeral 3° que se rechazará la demanda “*Cuando el asunto no sea susceptible de control judicial.*”

En mérito de lo expuesto, el Despacho,

² CONSEJO DE ESTADO - SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO- SECCIÓN SEGUNDA - SUBSECCIÓN “A” -CONSEJERO
PONENTE: William Hernández Gómez- veintiuno (21) de abril del dos mil dieciséis (2016) Expediente núm.: 47-001-23-33-000-
2013-00171-01

R E S U E L V E:

PRIMERO.- RECHAZAR la demanda interpuesta por el señor **JULIO ENRIQUE ÁNGEL SILVA**, en contra de la **UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL - UGPP**, conforme lo manifestado en la parte motiva de este proveído.

SEGUNDO.- Ejecutoriada la presente providencia, previas las anotaciones a que haya lugar, devuélvanse a la parte demandante los anexos sin necesidad de desglose y a través de la Oficina de Apoyo procédase al archivo correspondiente.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE


ANDRÉS JOSÉ QUINTERO GNECCO
Juez

FV

 JUZGADO VEINTISÉIS ADMINISTRATIVO DE ORALIDAD CIRCUITO JUDICIAL DE BOGOTÁ D.C. Por anotación en ESTADO ORDINARIO notifico a las partes la providencia anterior hoy 18 DE JUNIO DE 2019 , a las ocho de la mañana (8:00 a.m.)  LIZZETH VIVIANA MANGREJO SILVA SECRETARIA
--